



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 36

SEPTIEMBRE 2009

A diez años del pacto, vamos por más crisis

En septiembre, Nicaragua celebró junto a toda Centroamérica, las fiestas patrias que conmemoran la independencia de España en 1821. También se conmemoró en el país el 30 aniversario de fundación del Ejército y la Policía, dos de las instituciones fundamentales del estado. Sin embargo, los desfiles, las bandas musicales y el espíritu patriótico de estos días no lograron ahogar y mucho menos ocultar, la gravedad de los problemas que aquejan al país, el impacto que ya están teniendo en la población y el futuro preocupante que anuncian.

Efemérides patrias y problemas mayúsculos

Las efemérides patrias y los aniversarios institucionales han quedado rápidamente disueltos en el cúmulo de acontecimientos y problemas transcurridos en el mes de septiembre y que ponen en evidencia una situación crítica para el país, donde se cruzan factores de alto riesgo que marcan la pauta de final del período para el actual gobierno.

La crisis económica del país, agravada por la insolvencia presupuestaria, la continuidad de las políticas económicas y el impacto del fenómeno climático “El Niño”



auguran una situación difícil para el país durante los próximos dos años, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. Mientras que la insistencia del gobierno por reformar la Cons-

titución con fines reeleccionistas, tampoco augura un buen clima político de aquí a las próximas elecciones presidenciales, una carrera para la que ya se están preparando los supuestos corredores.

Estos son los dos grandes retos que tendrá que enfrentar el gobierno de aquí a la finalización de su mandato, y junto con él, todo el país. Sin embargo, las consecuen-

cias las padecerán sobre todo los nicaragüenses, especialmente las de la crisis económica, pues al presidente parece preocuparle más su reelección que evitar el descalabro económico.

Crisis económica y reforma tributaria

La crisis económica y sus consecuencias sobre el país aparecen como el más urgente y grave problema a enfrentar para el gobierno. La insolvencia presupuestaria y la controversial propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno pusieron sobre el tapete la progresiva asfixia financiera del gobierno y la urgente necesidad de tomar medidas serias y de fondo para disminuir el impacto de la crisis.

En esta situación se pone en evidencia el cruce de variables externas que juegan y presionan en diversas direcciones. Una de ellas es el recorte del apoyo presupuestario por parte de la cooperación europea que apuntaló el actual desajuste fiscal. La otra, consiste en la crisis internacional que presiona con la caída de las exportaciones y de las remesas en un contexto recesivo interno. Una tercera variable en juego, es la controvertida ayuda venezolana cada vez más privatizada por los grupos económicos en ascenso vinculados con el partido de gobierno y que no ayuda en nada al país. Una última variable que ha venido a sumarse, es la aparición del fenómeno climático “El Niño” y que está afectando la producción de granos básicos en el todo el país.

Los esfuerzos del gobierno por destrabar el apoyo presupuestario de la cooperación no han éxito a lo largo del año, aún cuando se ha procurado mantener abierto el espacio de diálogo entre ambos actores. Lo cierto es que la posición firme de los europeos respecto a los resultados de las elecciones municipales y el estado de los derechos ciudadanos y la gobernabilidad, es difícil que el gobierno logre destrabar esos fondos para el próximo

año, sobre todo porque el gobierno ha apostado a mantener su posición de no reconocer el fraude y restringir los derechos ciudadanos.

La situación se agrava con el caso de Honduras, donde la cooperación también ha sostenido una posición firme en relación a los temas de la democracia y la gobernabilidad. Eso significa que difícilmente el gobierno va a sustituir estos fondos con otros, por lo que el presupuesto está desfinanciado y seguirá así el próximo año de mantenerse la tendencia en la relación gobierno-cooperación. El impacto ya está haciéndose sentir en el recorte de las políticas sociales, particularmente educación y

la realización de una reforma tributaria. En efecto, si bien la reforma tributaria es importante para el presupuesto y el país, ha sido elaborada apresuradamente y sin preparativos políticos suficientes, de tal manera que ha generado un gran debate público en torno al tema donde la mayoría de las opiniones no se muestran favorable a la propuesta, no tanto porque no se considere necesario realizar la reforma, sino porque el contenido de la propuesta gubernamental no apunta necesariamente a resolver el problema. Las opiniones se han externa públicamente, pero el gobierno se ha negado a participar en



Los esfuerzos del gobierno por destrabar el apoyo presupuestario de la cooperación no han éxito a lo largo del año, aún cuando se ha procurado mantener abierto el espacio de diálogo entre ambos actores.

salud, pero además en las transferencias hacia las municipalidades y otros programas sociales.

La alternativa de solución que el gobierno ha planteado es

el debate y se ha enfocado en apurar el trámite de aprobación en la Asamblea Nacional considerando la urgencia con el presupuesto del próximo año. Fuera de eso, éste es un frente en el cual, el gobierno no se desgastará mucho.

Por el lado de la crisis económica internacional, se suman las propias debilidades nacionales y la emergencia climática por el fenómeno “El Niño”, para agravar la ya deteriorada situación del país. Pero tampoco en este punto se debe esperar algún tipo de apertura política pese a la importancia



del tema no solamente para el país, sino también para los sectores de población más empobrecidos y vulnerables. Al gobierno le basta con cerrar el año y mantener los fondos dirigidos a su clientela política. El problema es que los efectos de la crisis y del fenómeno climático van a afectar sobre todo a los sectores más pobres de la población y a los sectores que producen granos básicos, productos básicos de consumo para la mayoría de la población. Como resultado, el próximo año va a haber más hambre y menos alimentos pues no se ve la preocupación del gobierno por formular políticas productivas para la seguridad alimentaria de la población.

La discutida cooperación venezolana, todavía en el limbo jurídico, ha sido la bandeja de plata para la constitución de un nuevo grupo de poder económico que succiona recursos e influencias del estado mientras el país se administra solo en su pobreza y su desfalleciente institucionalidad. Este grupo de poder nucleado alrededor de la familia presidencial, ha acaparado los principales rubros económicos del país, tales como los hidrocarburos y las telecomunicaciones, sólo para mencionar a dos de los más importantes. Poco a poco han tendido una madeja que tiene envuelto a todo el sector de los grandes empresarios, mientras que los sectores empresariales medios y pequeños no tienen chances a menos que se subordinen a los monopolios que han venido construyendo. Este parece ser en realidad, es el principal proyecto del gobierno, y a él se subordina incluso su intención de reelección presidencial, de continuidad en el gobierno y control de las instituciones del estado.

Reformas constitucionales y campaña temprana

Del lado de la política, y como si fuera poco, la viabilidad de las

reformas constitucionales propuestas por el FSLN en función de la reelección presidencial han empanado a la Asamblea Nacional al juntarse en el tiempo con la reforma tributaria, el cuestionamiento de las elecciones, pasadas y futuras, y la eventual recomposición política de la oposición liberal, alarmada por su debilidad y por la presión que le impone el tren arrollador del oficialismo.

Las reformas constitucionales promovidas por el FSLN no han encontrado eco en las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. Efectivamente, por más intentos que ha realizado, el partido de gobierno no ha logrado conseguir los votos suficientes para llevarlas a cabo, por esa razón tiene una carrera contra el tiempo para efectuarlas y asegurar la reelección presidencial y la continuidad en el gobierno.

Las reformas constitucionales promovidas por el FSLN no han encontrado eco en las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. Efectivamente, por más intentos que ha realizado, el partido de gobierno no ha logrado conseguir los votos suficientes para llevarlas a cabo, por esa razón tiene una carrera contra el tiempo para efectuarlas y asegurar la reelección presidencial y la continuidad en el gobierno. La verdad es que los planes no se han concretado en el tiempo ni la forma en que habían pensado y ahora se encuentran en situación poco favorable considerando las correlaciones de fuerza en el parlamento, por lo que se prevé que el Frente utilizará todos sus recursos, legítimos y no legítimos, para forzar la reelección presidencial.

Sin embargo, aunque el FSLN lograra materializar sus intenciones, el escenario político de aquí a las próximas elecciones presidenciales no pinta bien. En primer lugar, el fraude electoral no ha sido olvidado y diferentes actores, incluida la cooperación, siguen demandando transparencia respecto a los resultados de las municipales pasadas y, más importante aún, garantías completas de que los próximos comicios no se realizarán en las mismas condiciones. Esta presión crece más y más en la medida que se va acercando la fecha de las próximas elecciones presidenciales y tiene entre sus aspectos más críticos la necesaria reforma a la ley electoral, la recuperación de la credibilidad y el prestigio del Consejo Supremo Electoral y la demanda de pluralidad en la competencia.

El segundo elemento es la potencial recomposición de las fuerzas liberales, que no parece avanzar mucho en este momento debido a la dureza de las distintas posiciones, pero sobre todo, a la influencia de la figura de Arnoldo Alemán. No cabe duda que del otro lado de la balanza están las reformas constitucionales y la nueva puja que se perfila por el control de la CSJ, dos aspectos políticamente más estratégicos para el gobierno. Frente a ello, los liberales han encontrado en la contestación de las elecciones municipales, la oportunidad para tomar distancia de la negociación forzada con el gobierno a la que los mantenía amarrados Arnoldo Alemán. Pero, por el momento, todavía no se ven señales de que se lleguen a recomponer políticamente en una fuerza más coherente que altere la correlación de fuerzas en el parlamento y la capacidad de cooptación del gobierno. La batalla pos elecciones municipales parece perdida a estas alturas pero les quedan todavía los recursos introducidos en la CSJ, la eventual reforma de la ley electoral



y la recomposición del CSE como cartas de una posible negociación.

Conociendo de antemano las dificultades que se presentarán en el plano económico y la dificultad de la correlación de fuerzas política que actualmente tiene, el partido de gobierno ya arrancó su campaña electoral a fin de asegurar con tiempo los votos de sus afines desde muy temprano, pero además, para contrarrestar las acciones de la oposición y ganar algunos votos más, si puede. Para eso no ha dudado en reactivar sus programas como el “Hambre Cero” para distribuir gallinas y cerdos a familias pobres, aunque es evidente que la cobija del clientelismo político no alcanzará para todos, especialmente en período de crisis económica, sequía y hambruna.

El escenario al final del gobierno Ortega

Las tendencias que se revelan en estos acontecimientos no pueden dejar de analizarse en el marco de la involución que sufre la democracia en el país. Si a la debilidad de las instituciones se suman el empantanamiento de la Asamblea Nacional y una situación de deterioro económico, el cuadro se hace más sombrío. De ahí que los tiempos políticos son vitales para los principales actores sociales y políticos del país.

Al parecer el gobierno no tiene la menor intención de modificar su ya característico manejo de la situación: discrecionalidad, secretismo, conspiración y ausencia de debates públicos. El resultado también es conocido: forzar todo lo que se pueda, independientemente del costo. Pero si en parte esto se debe a la forma de gobierno, que no cambiará, encuentra un incentivo poderoso en el diseño de su proyecto de poder político-económico y de sus tiempos.

Fuera del oficialismo la situación puede tener resultados inesperados: acabar con la cómoda

y conveniente neutralidad de los grandes empresarios, reorganizar la oposición, incrementar las contradicciones con la iglesia y polarizar aún más las posiciones políticas de todo el país. Con eso, el gobierno y el FSLN se están asegurando un final de período tensionado al máximo. Sin duda, son muchos frentes abiertos al mismo tiempo.

Bajo este cruce de situaciones las reformas constitucionales empujadas por el gobierno continuarán con su trabajo de zapa cada vez más intenso porque queda poco tiempo, en eso consumirán una buena parte de sus energías políticas. Es previsible entonces, que los caudillos trabajen en un nuevo ciclo de toma y daca que el país podría ahorrarse dada su maltrecha situación social y económica.

Pero los dados ya están lanzados. El gobierno necesita mantenerse en el poder por otro periodo más para consolidar su proyecto y a la oposición no le queda tampoco más tiempo ni muchos subterfugios. Por debajo de la palestra política las cosas están cambiando aceleradamente. El grupo de poder gubernamental está utilizando a fondo la debilidad de las instituciones para confundir más el interés público con sus intereses privados. De esta manera está convirtiéndose en dueño de la parte más importante en la matriz energética del país, una acumulación de poder económico con múltiples ramificaciones que lo situará como uno de los grupos económicos más importantes. El círculo de poder político mediante la captura del estado se cerrará entonces con el poder económico incrementado.

Algunos considerarán que esto no es diferente de lo que ocurre en otros países. Es decir, que se utilice el poder político para construir poder económico y viceversa. Pero esa perspectiva legítima por anticipado no sólo la colusión del uso del poder político con fines de acumulación económica sino que

también la forma en que se hace. Y aquí vienen los problemas.

Una cosa es que los actores económicos busquen que sus intereses sean representados políticamente y otra, es que se utilicen las instituciones y mecanismos estatales para beneficio de los grupos entronizados permanentemente en él. No está de más decir que eso conduce a la destrucción de todos los estándares de independencia de la institucionalidad, del estado de derecho, el pluralismo y la capacidad de regulación pública de los diversos intereses. La democracia, si es que se le puede llamar así, se vuelve un tenue disfraz de los grupos dominantes y sus prácticas, la legalidad se instrumentaliza en función de blanquear el usufructo, y se incrementa la impunidad del poder frente a la indefensión de los ciudadanos.

No cabe duda que esto ha ocurrido en muchos países, generalmente en períodos dictatoriales, pero eso no justifica de ninguna manera la permisividad o la indiferencia. Para esos países las consecuencias han sido catastróficas. Sin mencionar la historia de la dictadura somocista, basta recordar ejemplos más recientes con la Argentina de Menem, que le heredó la tasa de pobreza más alta de su historia; el reparto bipartidista de un siglo en Honduras, con su legado poco honorable del país más pobre de América Latina, o el caso de países como Rusia, que con todo su potencial se empobrecieron dramáticamente.

Muchas voces sensatas están llamando al gobierno a rectificar su rumbo ahora que todavía hay tiempo, sin embargo, todas esas voces se han encontrado frente a una pared sorda y muda. Esperemos que la asfixia económica y el descontento político no lleven al país a una situación como el vecino Honduras. El gobierno debería meditar esta lección por su propio bien y el de todo el país.